

plotación presentados por los peticionarios, en cuanto no se opongan a lo que se especifica en el presente Real Decreto y a las condiciones siguientes:

Primera. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos veintinueve y treinta de la Ley, esta concesión de explotación se otorga por un periodo de treinta años, que comenzará a partir del día siguiente al de la publicación del presente Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión que por este Real Decreto se otorga, las titulares, en el plazo de quince días, deberán ingresar en la Caja General de Depósitos la nueva fianza, tal como dispone la Ley y Reglamento vigentes en su artículo treinta y cinco, apartado dos punto uno y dos punto dos.

Tercera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo treinta del Reglamento vigente, las concesionarias deberán comenzar las operaciones de explotación en el plazo máximo de tres años, contados a partir del día siguiente al de su publicación del presente Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarta. La explotación del yacimiento descubierto por el sondeo GCC-dos, ubicado en la concesión que se otorga «Atlántida-III», se realizará conjuntamente con la de los yacimientos situados en las concesiones «Atlántida I» y «Atlántida-II» por medio de una plataforma central fija.

El yacimiento descubierto por el sondeo GCC-dos, con una profundidad de agua de setenta y ocho metros, se explotará mediante dos pozos con doble acondicionamiento (dos tuberías de producción cada uno de ellos), con cabezas y árboles de válvulas submarinas, que serán controladas desde la plataforma y desde la terminal costera.

Desde la plataforma central se enviará el gas a tierra, a través de un gasoducto.

Quinta. De conformidad con lo dispuesto en los artículos veintiocho, treinta y cinco y treinta y nueve del citado Reglamento, los titulares de la concesión deberán tomar toda clase de precauciones en prevención de daños o riesgos que como consecuencia de las operaciones puedan afectar a la seguridad de vidas humanas, la propiedad, reservas naturales, costas, lugares de interés turístico e instalaciones públicas, y en general a la contaminación del medio ambiente, cumplir las normas nacionales vigentes y las prescripciones que eventualmente pueda imponerle la Dirección General de la Energía.

Asimismo, las titulares deberán constituir un seguro por mediación de Entidades aseguradoras españolas como cobertura de los riesgos de colisión, contaminación y daños a terceros, no inferior a mil millones de pesetas por el conjunto de las concesiones «Atlántida-I», «Atlántida-II», «Atlántida-III» y «Atlántida-IV».

Sexta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo treinta del Reglamento, las concesionarias deberán presentar en el Ministerio de Industria y Energía, Servicio de Hidrocarburos, tres meses antes del comienzo de cada año natural para su aprobación, el programa de trabajos y de explotación para dicho año.

En el año de comienzo de la explotación, tal programa se presentará al menos tres meses antes de la puesta en marcha de las instalaciones y abarcará el período previsto entre el principio de la explotación y el fin del año natural.

Las alteraciones que sea preciso introducir por las concesionarias en el programa previsto deberán ser sometidas al Ministerio de Industria y Energía dentro de los treinta días siguientes al de conocerse la necesidad de realizarse, y se entenderán aprobadas de no recibirse notificación en contrario en el plazo de treinta días.

Séptima. En el caso de que las concesionarias, en lugar de operar por sí mismas o a través de la Compañía operadora autorizada, decidieran concretar contratos de asistencia técnica, de trabajos o de servicios, deberán ser todas ellas sometidas a la aprobación de la Administración, a los efectos de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cuatro.

Octava. Las instalaciones que se monten para la explotación de los yacimientos deberán ser aprobadas por el Ministerio de Industria y Energía.

Artículo tercero.—Se autoriza al Ministerio de Industria y Energía para dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo que en este Real Decreto se dispone.

Dado en Madrid a cinco de febrero de mil novecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,
IGNACIO BAYON MARINE

6886 RESOLUCION de 23 de enero de 1981, de la Delegación Provincial de La Coruña, por la que se hace público el otorgamiento de los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en La Coruña hace saber que han sido otorgados los siguientes permisos de investigación:

Número: 5.814. Nombre: «Six». Mineral: Pirita y hierro. Hectáreas: 16.220. Términos municipales: Enfesta, Santiago, Boqueijón, Vedra, Touro y El Pino.

Número 5.814. Nombre: «Six». Fracc. 3.ª Minerales: Pirita y hierro. Hectáreas: 50. Términos municipales: Vedra y Boqueijón. Número 5.920. Nombre: «Coto Minero de Curtis». Minerales: Hierro, cuarzo, caolín, cobre y níquel. Hectáreas: 7.639. Términos municipales: Mellid, Santiso, Toques, Sobrado, Curtis y Vilasantar.

Número: 6.372. Nombre: «Ampliación a Zanca de Pedregosas». Minerales: Cuarto, estaño, wolframio y cianita. Cuadrículas: 9. Términos municipales afectados: Trazo y Oroso.

Número 6.395. Nombre: «María». Minerales: Caolín, cianita y cuarzo. Cuadrículas: 87. Términos municipales: Coristanco, Zas y Cabana.

Número: 6.384. Nombre: «Mariela». Mineral: Cuarzo. Cuadrículas: 40. Términos municipales: Laracha y Cerceda.

Número 6.376. Nombre: «La Amistad». Mineral: Cuarzo. Cuadrículas: 74. Términos municipales: Oroso, Enfesta y El Pino.

Número: 6.381. Nombre: «Camino». Mineral: Cuarzo. Cuadrículas: 69. Términos municipales: Trazo, Oroso y Enfesta.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

La Coruña, 23 de enero de 1981.—El Delegado provincial, por delegación, Jesús Hervada y Fernández España.

6887 RESOLUCION de 27 de enero de 1981, de la Delegación Provincial de Tarragona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública a los efectos de imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A/T 4.277. Línea a 25 KV. a E. T. Guixo (T. 13.384). Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona, plaza Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor aluminio-acero de 30 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 49 metros, para suministro a la E. T. Guixo de 25 KVA. de potencia.

Origen: Línea 25 KV. Tortosa-Hifrensa.

Presupuesto: 581.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Perelló.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 27 de enero de 1981.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—2.118-C.

6888 RESOLUCION de 30 de enero de 1981, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado de apelación en el recurso contencioso-administrativo número 324/1977, promovido por «Laboratorios Liade, S. A.», contra resolución de este Registro de 26 de enero de 1976 y 2 de febrero de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 324/1977, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Laboratorios Liade, S. A.», contra resolución de este Registro de 26 de enero de 1976 y 2 de febrero de 1977, se ha dictado por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, sentencia en 10 de julio de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando en parte la apelación interpuesta por «Laboratorios Liade, S. A.», contra sentencia de dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y nueve, dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, debemos revocar y revocamos, por no ajustarse al ordenamiento jurídico, la sentencia apelada, en cuanto desestimó recurso de la Sociedad ahora apelante y declaró conformes a derecho los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de veintiséis de enero de mil novecientos setenta y seis y dos de febrero de mil novecientos setenta y siete, denegatorios de la solicitud de registro de la marca número seiscientos cuarenta mil seiscientos sesenta, «Reumatile», que se

anulan, mandando conceder el registro solicitado; confirmándola en lo demás, sin costas en ninguna de las dos instancias.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 30 de enero de 1981.—El Director general, Juan Fernández de Ybarra Moreno.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

6889 RESOLUCION de 30 de enero de 1981, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado de apelación en el recurso contencioso-administrativo número 245/1973, promovido por «Cahors Española, S. A.», contra resolución de este Registro de 28 de enero de 1973. Expediente de modelo de utilidad número 52.963.

En el recurso contencioso-administrativo número 245/1973, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Cahors Española, S. A.», contra resolución de este Registro de 28 de enero de 1973, se ha dictado con fecha 20 de noviembre de 1974 por el Tribunal Supremo sentencia en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que se estima el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad «Cahors Española, S. A.», contra la sentencia de fecha seis de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso número doscientos cuarenta y cinco de mil novecientos setenta y tres de su registro, cuya resolución revocamos y dejamos sin efecto y, consiguientemente, anulamos la resolución del Registro de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y tres por la que se anuló e denegó el modelo de utilidad concedido a la expresada razón social por el anterior acuerdo de diecinueve de octubre de mil novecientos setenta, cuyo acuerdo concesorio declaramos subsistente, sin hacer especial condena de costas en ninguna de las instancias.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 30 de enero de 1981.—El Director general, Juan Fernández de Ybarra Moreno.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

6890 RESOLUCION de 30 de enero de 1981, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 172/1977, promovido por «Industrias Químicas Procolor, S. A.», contra resolución de este Registro de 30 de noviembre de 1976. Expediente de nombre comercial número 64.003.

En el recurso contencioso-administrativo número 172/1977, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Industrias Químicas Procolor, S. A.», contra resolución de este Registro de 30 de noviembre de 1976 se ha dictado con fecha 5 de mayo de 1979 por la citada Audiencia sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el actual recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador don José María Murua Goded y a su cesación, por don Leandro Navarro Urra, en nombre y representación de la Entidad demandante «Industrias Químicas Procolor, S. A.», frente a la demandada Administración General del Estado, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial —Ministerio de Industria—, de fecha diez de diciembre de mil novecientos setenta y cinco y treinta de noviembre de mil novecientos setenta y seis, a las que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos ser conformes a derecho ambas resoluciones administrativas, referidas e impugnadas; todo ello sin hacer expresa declaración

de condena en costas, respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 30 de enero de 1981.—El Director general, Juan Fernández de Ybarra Moreno.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

6891 RESOLUCION de 30 de enero de 1981, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.330/1977, promovido por doña Pilar Vázquez Minué contra resolución de este Registro de 1 de julio de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.330/1977, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por doña Pilar Vázquez Minué contra resolución de este Registro de 1 de julio de 1976, se ha dictado con fecha 8 de julio 1980 por la citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando la causa de inadmisibilidad de falta de legitimación activa, alegada por la codemandada «Laboratorios Liade, S. A.», declaramos la inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativo formulado por doña Pilar Vázquez Minué contra acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de uno de julio de mil novecientos setenta y seis y veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y siete, por los que concedieron a aquella Entidad la marca «Doxilase», número seiscientos cuarenta y nueve mil diez. Sin hacer especial imposición de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 30 de enero de 1981.—El Director general, Juan Fernández de Ybarra Moreno.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

6892 RESOLUCION de 30 de enero de 1981, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 383/1977 promovido por «Enka Glanzstoff, Ag.», contra resolución de este Registro de 17 de febrero de 1976. Expediente de marca nacional número 665.404.

En el recurso contencioso-administrativo número 383/1977, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Enka Glanzstoff, Ag.», contra resolución de este Registro de 17 de febrero de 1976, se ha dictado por la citada Audiencia con fecha 28 de junio de 1979 sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el presente recurso, interpuesto por «Enka Glanzstoff, Ag.», debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de diecisiete de febrero de mil novecientos setenta y seis y veintidós de junio de mil novecientos setenta y siete. Sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 30 de enero de 1981.—El Director general, Juan Fernández de Ybarra Moreno.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.